




PRONUNCIAMIENTO DEMANDA DE TUTELA 2024-00306-00

Desde Wilson David Galindo Gonzalez <wgalindog@deaj.ramajudicial.gov.co>

Fecha Lun 18/11/2024 9:38 AM

Para Juzgado 07 Administrativo - Bolívar - Cartagena <admin07cgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivo adjunto (254 KB)
PRONUNCIAMIENTO.pdf;

Buenos días,

Cordial saludo,

De manera respetuosa procedo a remitir pronunciamiento a la demanda de tutela en el marco de la acción constitucional de la referencia.

Agradezco su atención,

Cordialmente,

Wilson David Galindo González

Profesional Universitario

Unidad de Asistencia Legal

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial



AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.



DEAJALO24-16381

Bogotá D.C., 18 de noviembre de 2024

Respetado doctor:

ALFREDO DE JESUS MORENO DIAZ

Juzgado 7° Administrativo del Circuito de Cartagena

Ciudad

Acción : Tutela
Expediente : 13001-33-33-007-2024-00306-00
Accionante : Wilson Yesid Suárez Manrique
Accionada : Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
Asunto : Pronunciamiento

WILSON DAVID GALINDO GONZÁLEZ, en mi condición de abogado adscrito a la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ), identificado con cédula de ciudadanía 1.016.039.926 de Bogotá, con tarjeta profesional número 306.877 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, acudo a su Despacho para pronunciarme sobre la demanda de tutela promovida por el señor Wilson Yesid Suarez Manrique contra la entidad demandada.

I. LA SOLICITUD DE AMPARO

El señor Wilson Yesid Suárez Manrique, quien actúa en nombre propio, presentó acción de tutela con el objeto de obtener la protección de sus derechos constitucionales fundamentales de petición y debido proceso, presuntamente quebrantados por la entidad accionada.

Como consecuencia de lo anterior, pidió que se ordene a la accionada resolver de fondo, de manera clara y congruente las objeciones a las preguntas efectuadas en el marco de la convocatoria 27 adelantada por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, informando los resultados de las calificaciones obtenidas en los módulos de ética, independencia, autonomía, filosofía del derecho e interpretación constitucional, y se proceda a recalificar su puntaje obtenido.

II. ARGUMENTOS DE DEFENSA

2.1 Asunto preliminar. Recuérdese que la acción constitucional de tutela fue prevista como un instrumento subsidiario de defensa judicial, preferente y sumario, al cual puede acudir cualquier persona, por sí misma o por quien actúe en su nombre, para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando advierta que han sido quebrantados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad o particular.

Empero, aunque una de las características de la referida acción es su informalidad¹, la

¹ Artículo 14 del Decreto Ley 2591 de 1991: «CONTENIDO DE LA SOLICITUD. Informalidad. En la solicitud de tutela se expresará, con la mayor claridad posible, la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado, el nombre de la autoridad pública, si fuere posible, o del órgano autor de la amenaza o del agravio, y la

jurisprudencia ha reconocido que su ejercicio se encuentra sometido al cumplimiento de presupuestos mínimos, entre otros, que el interesado especifique la autoridad que presuntamente quebranta o amenaza las garantías superiores cuya protección deprecia², o, cuando menos, ofrezca información que permita al juez constitucional determinarla.

Cabe recordar que la legitimación en la causa es un elemento que hace referencia a la calidad o derecho que tiene una persona (natural o jurídica) como sujeto de una relación jurídica sustancial, para (i) activar la jurisdicción (por activa) y (ii) defenderse de las imputaciones formuladas en su contra (por pasiva).

Sobre el particular, el artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991 se refiere a las **«PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCION E INTERVINIENTES»**, así:

La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud [se subraya].

La Corte Constitucional, al analizar el anterior aspecto³, precisó que la legitimación en la causa por pasiva comporta las siguientes condiciones:

La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental.⁴ En la medida que refleja la calidad subjetiva de la parte demandada “*en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso*”⁵, la misma, en principio, no se predica del funcionario que comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será la llamada a responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya lugar a ello.

Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “*debe dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o*

descripción de las demás circunstancias relevantes para decidir la solicitud. También contendrá el nombre y el lugar de residencia del solicitante.

[...].»

² Artículo 86 de la Carta Política: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. [...]».

³ Corte Constitucional, sentencia T-1015 de 2006, M. P. Álvaro Tafur Galvis.

⁴ Sentencia T-025 de 1995. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

⁵ Sentencia T-416 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell.

su resolución, fuera de las simples condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta Fundamental.”⁶ Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales (oficiosidad) y a interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección del derecho fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es demandado.

En esa medida, la renuncia a la aplicación del principio *pro actione*, la adopción de interpretaciones restrictivas de la demanda o la imposición de requisitos que no son propios de la acción y que resultan excesivos frente a su naturaleza informal, desconocen los derechos a una tutela judicial efectiva y pueden representar un acto de denegación de justicia, cuando con ello se fundamenta una decisión inhibitoria, en contravía de lo que expresamente dispone el parágrafo del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991. Como ha dicho la Corte, *“resulta inadmisibles frente a la Constitución que un Juez de la República, en lugar de tramitar y resolver una acción de tutela, profiera sentencia inhibitoria.”⁷*

Por ello, la Corte Constitucional ha señalado que no se debe actuar con excesivo rigor en el análisis de los requisitos formales de la demanda, en perjuicio de la protección debida a los derechos fundamentales en juego. Además se ha pronunciado frente al deber irrenunciable del juez de tutela en la integración del contradictorio, cuando considera que la demanda se dirige contra quien no está llamado a responder por la vulneración del derecho fundamental. En ese sentido ha dicho que *“en virtud de la oficiosidad e informalidad que orientan el proceso de tutela, esta no puede ser denegada con base en argumentos de tipo formalista o en factores que pueden ser fácilmente superados por decisiones del juez constitucional, ya que, entre sus deberes se encuentra el de vincular al trámite de la acción, a todos aquellos que por disposición legal y constitucional puedan resultar comprometidos en la afectación de los derechos fundamentales del accionante o de sus representados.”⁸*

[...]

En segundo lugar, la Corte encuentra que aún si hubiera existido falta de legitimación pasiva o se presentara alguna duda al respecto, la decisión del juez de instancia tendría que haberse orientado a la vinculación oficiosa de quien correspondiera, en lugar de negar la tutela del derecho fundamental por un obstáculo formal que, en caso de haberse presentado, habría sido fácilmente superable, de acuerdo con las facultades que el Decreto 2591 de 1991 le entrega a la autoridad judicial.

De conformidad con lo anotado, concierne –en principio– al interesado indicar la autoridad u organismo que debe soportar las peticiones de la acción que instaura; empero, en caso de que dicha información no sea entregada o se suministre de manera deficiente o ambigua, el juez constitucional debe, en virtud del principio *pro actione*⁹, determinar la legitimación por

⁶ Sentencia T-379 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

⁷ Auto 030 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

⁸ Sentencia T-1223 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, consejero ponente: Jesús María Carrillo Ballesteros, fallo de 8 de marzo de 2002, radicación 76001-23-31-000-2001-3904-01 (ACU-1235): «Bajo tal precepto, se ha entendido que el sentido de interpretación del juez y en especial del juez constitucional, en cualquiera de las cuatro acciones constitucionales, debe permitir el acceso a la administración de justicia, interpretando el recurso o acción interpuesta, de la manera más favorable para la efectividad de los derechos».

pasiva con respaldo en los argumentos consignados en la solicitud de amparo o las pruebas adosadas.

En el asunto *sub examine*, el actor alega la vulneración de los derechos fundamentales invocados presuntamente quebrantados por la entidad demandada, toda vez que a su juicio no se le ha brindado una respuesta clara, especialmente lo relativo a unas objeciones presentadas de unos resultados a las calificaciones obtenidas en los módulos de ética, independencia, autonomía, filosofía del derecho e interpretación constitucional, en relación con unas preguntas efectuadas en el marco de la Convocatoria 27 adelantada por el Consejo Superior de la Judicatura.

En punto de lo debatido, se destaca que los numerales 17 y 22 del artículo 85, en consonancia con el artículo 175 de la Ley 270 de 1996¹⁰, establecen a cargo de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras, la competencia de administrar y reglamentar la carrera judicial de acuerdo con las normas constitucionales y legales.

Asimismo, el numeral 1º del artículo 101 *ibídem*¹¹ indica que las salas administrativas de las Direcciones Seccionales de la Judicatura administran la carrera judicial en el correspondiente distrito con sujeción a las directrices del Consejo Superior de la Judicatura.

Por su parte, el artículo 98 de la mencionada ley define la naturaleza de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial como *“el órgano técnico y administrativo que tiene a su cargo la ejecución de las actividades administrativas de la Rama Judicial, con sujeción a las políticas y decisiones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura”*.

Adicionalmente, el artículo 99 de la Ley 270 de 1996, determina la estructura de la administración de la Rama Judicial y en ella se establecen las funciones de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a cargo del director ejecutivo de la Administración Judicial, así:

“(…)

ARTÍCULO 99. DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL. El Director Ejecutivo de Administración Judicial deberá tener título profesional, maestría en ciencias económicas, financieras o administrativas y experiencia no inferior a cinco años en dichos campos. Su categoría, prerrogativas y remuneración serán las mismas de los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura.

Son funciones del Director Ejecutivo de Administración Judicial:

¹⁰ **ARTÍCULO 85. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS.** Corresponde a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura: (...) “(...) 17. Administrar la Carrera Judicial de acuerdo con las normas constitucionales y la presente ley (...) 22. Reglamentar la carrera judicial”.

ARTÍCULO 174. COMPETENCIA PARA ADMINISTRAR LA CARRERA. La Carrera Judicial será administrada por las Salas Administrativas de los Consejos Superior o Seccionales de la Judicatura, con la participación de las Corporaciones Judiciales y de los Jueces de la República en los términos de la presente ley y los reglamentos.

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentará y definirá, conforme a lo dispuesto en esta ley, los mecanismos conforme a los cuales habrá de llevarse a efecto la administración de la carrera y la participación de qué trata el inciso anterior.

¹¹ **ARTÍCULO 101. FUNCIONES DE LA SALAS ADMINISTRATIVAS DE LOS CONSEJOS SECCIONALES.** Las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura tendrán las siguientes funciones:

1. Administrar la Carrera Judicial en el correspondiente distrito con sujeción a las directrices del Consejo Superior de la Judicatura.

1. Ejecutar el Plan Sectorial y las demás políticas definidas para la Rama Judicial.
2. Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y responder por su correcta aplicación o utilización.
3. Suscribir en nombre de la Nación-Consejo Superior de la Judicatura los actos y contratos que deban otorgarse o celebrarse. Tratándose de contratos que superen la suma de cien salarios mínimos legales mensuales, se requerirá la autorización previa de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
4. Nombrar y remover a los empleados del Consejo Superior de la Judicatura y definir sus situaciones administrativas, en los casos en los cuales dichas competencias no correspondan a las Salas de esa Corporación.
5. Nombrar a los Directores Ejecutivos Seccionales de ternas preparadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
6. Elaborar y presentar al Consejo Superior los balances y estados financieros que correspondan.
7. Actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan.
8. Representar a la Nación-Rama Judicial en los procesos judiciales para lo cual podrá constituir apoderados especiales; y,
9. Las demás funciones previstas en la ley (...). (Negrilla fuera de texto)

Aclarado lo anterior, se destaca que esta entidad no es la competente para administrar la carrera judicial, en tanto que, sobre la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura- Unidad de Administración de la Carrera Judicial recae la competencia para administrar y reglamentar de dicho asunto, de manera que son las autoridades legitimadas para responder por la presunta amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados por el actor.

En este orden de ideas, resulta improcedente incluir a la DEAJ en el extremo accionado, lo que impone declarar su falta su legitimación pasiva y, en consecuencia, ordenar la desvinculación respecto de la DEAJ en las presentes diligencias.

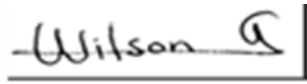
III. SOLICITUD

De acuerdo con lo expuesto en precedencia, solicito declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la DEAJ y, por ende, ordenar la desvinculación de esta entidad en las presentes diligencias.

IV. NOTIFICACIONES

El suscrito recibe notificaciones personales en las instalaciones de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, ubicada en la carrera 7.ª N° 27-18 de Bogotá, piso 15, División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal. Teléfono 601-3127011, extensión 7064. Correo electrónico institucional: deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co.

Del señor Juez,

A handwritten signature in black ink, reading "Wilson D", is enclosed within a rectangular box. The signature is written in a cursive style.

WILSON DAVID GALINDO GONZÁLEZ
Profesional Universitario
Unidad de Asistencia Legal
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial